

Proceso de politización y de desintegración de las Fuerzas Armadas Argentinas (1955-1976)

*Ricardo Sidicaro**

Resumen

Este trabajo analiza el proceso de politización de las elites militares argentinas y sus consecuencias tanto sobre las mismas Fuerzas Armadas como sobre el sistema político, en el período comprendido entre los golpes de estado de 1955 y 1976. Se atiende especialmente al efecto desintegrador que tuvieron, sobre las instituciones castrenses, los enfrentamientos facciosos entre sus “minorías activas”, preocupadas por preservar sus carreras y posiciones de privilegio, así como el papel que en ellos desempeñaron los discursos ideológicos a los que se apeló para justificarlos. Las acciones llevadas adelante por el elenco militar, a partir de 1976, muestran los extremos alcanzados por la situación de anomia y disolución institucional así como el carácter altamente desorganizador que tuvieron sobre la sociedad, el Estado y la misma institución militar.

Palabras clave: Fuerzas Armadas, minorías activas, politización, anomia.

Introducción

En este artículo nos proponemos analizar comprensivamente el sentido de las acciones de politización de las elites militares del período 1955-1976, y explicar causalmente las consecuencias de las mismas en la producción de efectos de desintegración de los marcos burocráticos e institucionales castrenses y de desorganización del conjunto del sistema político nacional.

* CONICET-UBA

Cuestiones de Sociología, N° 3, 2006, pp. 33-58.



Nuestra frase inicial anuncia el encuadre teórico weberiano en el que se inscribirá el desarrollo de esta indagación. Emplearemos los términos *elite* o *minoría activa* militar o castrense para referirnos a grupos relativamente pequeños formados por altos oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas, politizados en la defensa de sus propios intereses, que revelaron poseer gran poder de intervención sobre el desarrollo político nacional durante la época estudiada, grupos constituidos por la conjunción de proyectos individuales y carentes de la unidad de tipo estamental o del reconocimiento social que se asocia usualmente a las elites. Dado el carácter no ligado al prestigio social, ni a la idea de que se trataba de los mejores o más destacados en las esferas de las prácticas militares, para designar a las *elites* que ocuparán nuestra atención usaremos como sinónimo *minoría activa*.

En la medida que damos por conocidos los principales aspectos históricos, aquí sólo mencionaremos, cuando resulte necesario, algunos acontecimientos y datos imprescindibles, a modo de indicadores cualitativos, para fundamentar el desenvolvimiento de nuestra exposición. Dado que el tema militar se relaciona con muchos otros aspectos del desarrollo político del período, existen múltiples conexiones que podrían establecerse con otros problemas igualmente importantes, que, sin embargo, no se encontrarán en nuestra selección de recortes analíticos.

Los procesos sociopolíticos argentinos ocurridos desde 1955 hasta 1976 suscitaron frecuentes polémicas y relatos controvertidos, así como contribuciones de las ciencias sociales que, en no pocos casos, intentaron terciar en los debates políticos e ideológicos. Los temas relacionados con las acciones políticas de las FF. AA. fueron ineludibles dado el protagonismo decisivo de las mismas y sus efectos en los más disímiles dominios de la vida social. Las dos investigaciones más elaboradas sobre los militares, realizadas por investigadores extranjeros, Alain Rouquié (1982) y Robert Potasch (1994) trazaron, a la vez, un panorama amplio y minucioso sobre el tema y se convirtieron en obras de referencia obligada. No faltaron los aportes locales esclarecedores de algunas etapas o dominios más acotados. En muchos de esos estudios, aun cuando se realizaron avances en los conocimientos, la relación directa con las tensiones de la escena pública que les dieron origen pareció actuar como un elemento que no favoreció la discusión posterior de sus tesis y de sus hallazgos, y esto sucedió, en buena medida, por el carácter un tanto impreciso del campo intelectual en el que se elaboraron. Los trabajos de historia inmediata aportaron buenas descripciones del período brindando informaciones muy útiles para realizar un abordaje conceptual como el que nos proponemos desarrollar.

En lo relativo a la producción de conocimientos sobre procesos socio-históricos, nuestra perspectiva dirige su atención a las instituciones, sean éstas organizaciones sociales concretas o bien representaciones sociales imaginarias. En ese sentido coincidimos con Émile Durkheim y Paul Fauconnet cuando sostienen que: “las guerras, los tratados, las intrigas de corte o de asambleas, los actos de los hombres de Estado, son combinaciones que nunca se parecen a sí mismas; sólo se puede narrarlas [...] Por el contrario, las instituciones, si bien evolucionan, conservan sus trazos esenciales durante largos períodos y aún, frecuentemente, en el transcurso de una misma existencia colectiva” (Durkheim, 1975: 147). Desde esa óptica analítica, los actos y las justificaciones de los jefes militares nos interesarán en la medida que su obrar, cuyo sentido trataremos de comprender o interpretar, provocó o incidió en transformaciones institucionales, proyectándose más allá de los efectos que podían buscar esos individuos o sus metas inmediatas.

Ante los temas relacionados con los pasados políticos recientes se suelen formular interpretaciones casi al mismo tiempo que ocurren los hechos que tienden a ser aceptadas sin las debidas discusiones. El problema de ese tipo de conocimientos no reside sólo en las eventuales distorsiones subjetivas de los analistas que a la vez participan de los sucesos, sino, además, en la falta de conceptos y de parámetros para situar los hechos en el marco de transformaciones y comparaciones más amplias. Esas primeras interpretaciones pesan luego sobre la producción de nuevos conocimientos al convertirse en los ejes de discusión que encabezan los llamados “estado de la cuestión”, en los que, no pocas veces, pasan por tesis demostradas lo que fueron sólo conjeturas. En un sentido más general, puede afirmarse que sobre las explicaciones de los fenómenos relacionados con la política es usual congelar los conocimientos alcanzados y dejarlos fuera de nuevas discusiones, ignorando el carácter necesariamente provisorio que es propio de todo avance de la práctica científica. Demás está recordar que la ciencia sólo puede desenvolverse cuando cuestiona conocimientos estimados como firmes o, si se prefiere, cuando formula preguntas allí donde hay respuestas. Es cierto, no obstante, que los sistemas de dominación imperantes en cualquier disciplina científica distan de ser mecanismos propicios para estimular los debates que cuestionan el saber dado por adquirido. En el caso de las ciencias sociales, los patronazgos profesoraes y la ideologización han dado por efecto comunidades de pensamiento poco propensas a la discusión de sus tesis. Agreguemos que, en el caso argentino, los estudios sobre las estructuras y las dinámicas de la política, tuvieron, para muchos temas, una muy delgada separación de las opiniones de los actores de la escena pública, lo que perjudicó la precisión conceptual.

Sobre los inicios de la época que analizaremos, Gino Germani se situó en esa tenue línea divisoria en un artículo publicado en el año 1956, incorporado luego como noveno capítulo de su libro *Política y sociedad en una época de transición*, que, sin exagerar, cabe considerarlo como la obra fundadora de los estudios de la sociología científica sobre la Argentina. En dicho texto, Germani planteó la dicotomía totalitarismo-democracia para el caso nacional: “la tragedia política argentina residió en el hecho de que la integración política de las masas populares se inició bajo el signo del totalitarismo, que logró proporcionar, a su manera, cierta experiencia de participación política y social en los aspectos inmediatos y personales de la vida del trabajador, anulando al mismo tiempo la organización política y los derechos básicos que constituyen los pilares insustituibles de toda democracia genuina. La inmensa tarea a realizar consiste en lograr esa misma experiencia, *pero vinculándola de manera indisoluble a la teoría y a la práctica de la democracia y de la libertad*” (Germani, 1968: 337). La interpretación de Germani abría, objetivamente, la posibilidad de definir a la elite militar de 1955 como un agente de restauración de la democracia o, al menos, no era la que mejor podía inspirar preguntas sobre sus iniciativas autoritarias y, en ese sentido, no entraba en conflicto con el espíritu reinante en la capa ilustrada de la pequeño burguesía y en sus elites intelectuales. En un texto reciente señalamos que Germani diferenciaba la “participación ilusoria” de la “intervención real” de los sectores populares en la vida política en el decenio peronista, y entendía que se había producido una desviación con respecto a lo que teóricamente debía ser la representación de los verdaderos intereses de dichos sectores sociales. La visión de Germani compartía, “si bien en una clave distinta que la de otros críticos del peronismo, una matriz de comprensión del proceso político argentino que estimaba improbable la persistencia futura de la “ilusión” peronista en razón de los niveles de modernización alcanzados por la sociedad global y por las clases populares. Por otra parte, la definición del régimen peronista como totalitario, más allá de las pertinentes diferencias que Germani establecía en la comparación entre el caso argentino con el alemán y el italiano, llevaba a pensar que, al igual que en las experiencias europeas, inmediatamente después de la derrota de los regímenes totalitarios venía la disolución de sus sistemas de creencias y de las organizaciones de sus partidarios. Esa manera de apreciar el pasado reciente era coherente con las expectativas favorables que el mencionado sociólogo propuso en algunos de sus artículos de comienzos de los sesenta sobre lo que había sido la denominada Revolución Libertadora, cuyo carácter “democrático” se desprendía del hecho de haber destituido a lo que definía como “la dictadura totalitaria de Perón”(Sidicaro, 2004: 70). De las consideraciones precedentes se despren-

den las razones por las que en los comienzos de la etapa analizada el tema militar no atrajese la atención de las ciencias sociales locales y que, por regla general, el problema de la democracia fuese conceptualmente relacionado con las propensiones al autoritarismo atribuidas a las clases populares.

Las modernas ciencias sociales argentinas iniciaron su desarrollo en el clima intelectual y en las condiciones universitarias surgidas bajo la dictadura militar de 1955-1958, abriéndose un ciclo que se cerró con la dictadura de 1966. Lo ocurrido con el sistema universitario en general y con las ciencias sociales en particular entre 1955 y 1966, no puede explicarse adecuadamente sin remitir a las variaciones de las situaciones de las capas ilustradas de la pequeña burguesía y, en especial, de sus elites intelectuales. Pasado el primer momento de unidad global en torno al antiperonismo se comenzaron a bifurcar posiciones en el polifacético bloque que apoyó el golpe de 1955. En las capas ilustradas de la pequeña burguesía surgieron opiniones críticas hacia los sectores cultural y políticamente más tradicionales de la sociedad y con respecto a los actores socioeconómicos predominantes. En ese contexto, las universidades y las nuevas ciencias sociales pasaron a ser acusadas con frecuencia de tener afinidades con las ideas marxistas o socialistas, y esto sucedía en circunstancias en que los militares orientaban su politización en torno al anticomunismo. Sin embargo, en la inercia propia de la agenda académica de la sociología se mantuvo la prioridad fundacional dada a lo que Germani caracterizó como la *tragedia argentina* y en ella siguió excluido el tema militar.¹

En lo que concierne a nuestro análisis, las observaciones precedentes son indispensables para situar ciertos rasgos de la topografía de los conocimientos elaborados por las ciencias sociales locales sobre la cuestión militar, y, en especial, sobre los objetivos y motivaciones de la politización castrense comenzada en 1955. Puede sostenerse que el verdadero *punto ciego* de la mayoría de los estudios que, directa o indirectamente, se ocuparon del ciclo de dominación castrense se revela en el desinterés por la caracterización de la institución militar y por las conductas de las minorías activas de las FF. AA. instaladas en la máximas posiciones de poder en 1955. No faltaron los hechos públicos que podían haber llevado a las preguntas sobre el carácter de las elites castrenses que desalojaron a Perón: el bombardeo del 16 de junio

¹ Cabe aclarar, como lo hicimos en nuestro texto (Sidicaro, 2004), que con más distancia temporal, o política, de los acontecimientos de 1955, Germani propuso una interpretación que completaba su visión anterior: "Los golpes de Estado de 1945 contra Vargas y el de 1955 contra Perón y numerosos de los golpes de Estado militares sucesivos en esos dos países fueron preparados, al menos en parte, con la intención de desmovilizar a las clases populares o reducir su participación política" (Germani, 1972: 168).

de 1955; la ausencia de participación de la mayoría de la oficialidad en el golpe de septiembre; el golpe de palacio de noviembre; o los fusilamientos de militares en junio de 1956, no en tanto hechos puntuales e irrepetibles, combinaciones únicas que sólo cabe narrarlas, para decirlo con los términos de Emile Durkheim y Paul Fauconnet, sino como observables empíricos de una realidad institucional en descomposición cuyos síntomas eran materia de comentarios y temores cotidianos.²

El interrogante central al que trataremos de dar respuesta en este artículo remite, tal como lo dijimos al comienzo, a la comprensión del sentido de las acciones políticas de las elites militares entre los años 1955 y 1976, para explicar causalmente sus efectos de desintegración del cuadro organizativo de las FF.AA. y de desorganización del sistema político nacional. Diferenciaremos al respecto algunos factores cuya importancia analítica estimamos más significativa. “Factores” es un término que tiene varios significados y aquí lo empleamos como sinónimo de *elementos* o *concausas*, pero, también, en el sentido de su uso en matemáticas: cada una de las cantidades o expresiones que se multiplican para formar un producto, lo que en nuestro caso no implica considerar a los *factores* como compartimentos estancos sino que nos interesará destacar las relaciones que los constituyeron recíprocamente, o si se prefiere, la dialéctica de sus transformaciones en tanto participantes de una totalidad compleja. Comenzaremos abordando la politización de las FF.AA. para analizar luego sus efectos y sistemas de interacciones con los actores socioeconómicos predominantes y sobre los principales partidos políticos.

En las iniciativas políticas de las FF.AA. del período 1955-1976 distinguiremos dos subperíodos. El primero (1955-1973) se inició con la destitución de Perón, continuó con la dictadura 1955-1958, se prolongó con el cercenamiento del pluralismo electoral, y en directa relación con el objetivo de evitar el retorno al gobierno de los peronistas se interrumpieron dos administraciones civiles (1962 y 1966), cuya escasa legitimidad de origen era la consecuencia de las condiciones de semilegalidad impuestas por los mismos militares, y se instauraron dos regímenes bajo control castrense (1962-1963 y 1966-1973), y la etapa se clausuró cuando Perón y los heterogéneos dirigentes que lo secundaban, y disputaban por heredarlo, ganaron las elecciones que les permitieron acceder a los puestos de los aparatos estatales. En el segundo subperíodo (1973-1976) los militares parecieron aceptar la democracia pero la combinación entre sus propios intereses en retornar a los

² Al respecto, ver, el importante libro de Ana Alejandra Germani (2004) en el que se narra las preocupaciones de Gino Germani sobre la amenaza, tanto personal como para la sociología, que veía aproximarse por la acción del autoritarismo militar, a comienzos de la década del sesenta.

privilegios del manejo del poder político y la crisis del peronismo desembocó en una nueva dictadura, que fue la culminación del ciclo de politización militar abierto en 1955.

Las elites militares 1955-1973

Desde 1955 la organización jerárquica de las FF. AA. se fue desintegrando en incontables enfrentamientos facciosos, en acuartelamientos de caudillos de rangos altos o intermedios, en actos de desacato de las órdenes superiores, en golpes exitosos y en conatos frustrados, que se convirtieron en acontecimientos previstos y normales de la dinámica del sistema político nacional. Recién con la declinación del régimen autoritario instaurado por el golpe de estado de 1966, las FF. AA. atrajeron la atención de las ciencias sociales locales, pero, pese a todas las evidencias fácticas que indicaban lo contrario, lo interesante de destacar al respecto fue que se tendió a considerarlas como una institución estructurada, jerárquica y respetuosa del orden burocrático, velando los múltiples observables empíricos que podían permitir pensar en su situación de anomia y de desintegración. Todo se presentaba como si las fanfarrias y los oropeles de los desfiles militares, los rostros adustos de sus jefes con sus entrecortados discursos reglamentarios de alabanza formal al Estado-nación, hubiesen provocado efectos de estadolatría similares a los que condicionan las percepciones de las instituciones en los países políticamente ordenados.

Entre los estudios que incorporan como variable de análisis, principal o secundaria, la actuación política de las FF. AA. en la etapa 1955-1976 cabe señalar algunos supuestos centrales y recurrentes que, desde nuestra perspectiva, parece interesante discutir. Es cierto que, en virtud de la escasa sistematización de las perspectivas teóricas en las que se fundamentaba la inclusión de los militares en esos análisis, no ha sido habitual plantear preguntas sobre la consistencia formal y sustantiva de sus explicaciones. En esas interpretaciones primaron tres ejes temáticos: 1) el que remitió las luchas políticas del período a los conflictos por las transferencias intersectoriales de ingresos o por la redistribución de los patrimonios y adjudicó a los militares un carácter de instrumento al servicio de los intereses de sectores propietarios nacionales o extranjeros; 2) el que explicó la intervención política de las FF. AA. como si se tratase de la acción de una alta burocracia autónoma, cuyos mandos y oficialidades superiores actuaban como supuestos tecnócratas autoritarios preocupados por la modernización de la economía y del Estado; 3) el que caracterizó a los militares argentinos como actores guiados por la ideología anticomunista, doctrina que los habría convertido en perse-

verantes defensores de la organización capitalista de la sociedad, en devotos del occidente cristiano y en correas de transmisión de las estrategias internacionales de los Estados Unidos en su enfrentamiento con la URSS.

Desde la perspectiva analítica que hemos escogido, el primer dato que corresponde resaltar es que en septiembre de 1955 el gobierno peronista contaba con el apoyo de la mayoría de los oficiales de las FFAA. y que, como lo recordó Perón en repetidas oportunidades, su destitución fue la consecuencia de su decisión de no reprimir a las pocas unidades castrenses sublevadas contra las autoridades constitucionales. Quienes formaron el breve gobierno presidido por el general Eduardo Lonardi expresaron su voluntad de no alterar el marco institucional de regulaciones sociales construido en el decenio peronista, de pactar con el sindicalismo, de mantener en la legalidad al partido peronista, y de modificar los lineamientos de la política económica vigente para mejorar las relaciones con los principales actores socioeconómicos, meta coincidente con las propuestas de los tres últimos años la administración derrocada. Los promotores del golpe de palacio que impulsó en la presidencia al general Pedro Eugenio Aramburu el 13 de noviembre de 1955, estimaban que el grupo de militares nacionalistas que orientaban el gobierno de Lonardi intentaba hacer *peronismo sin Perón*, proyecto que desvirtuaba los objetivos de la "revolución". Así, la conducción de la dictadura pasó bajo control de una elite o minoría activa militar en cuyo núcleo se encontraron, con más acreditación simbólica a su favor, aquellos oficiales de rangos medios y superiores que habían sido dados de baja por el gobierno peronista por ser vistos, o haber actuado, como opositores, sin que faltasen en sus filas figuras que adhirieron al régimen anterior hasta la coyuntura de su destitución: el caso más notorio fue el del entonces contralmirante Isaac Rojas, convertido desde septiembre de 1955, en el principal mentor doctrinario del antiperonismo castrense y civil.

Estimamos que la comprensión del sentido de la acción de la elite militar o minoría activa que se instaló con el golpe de palacio de noviembre de 1955 en el control de las FFAA. y de las posiciones centrales del Estado debe realizarse colocando en un primer plano las motivaciones de los individuos que la componían, cuyas conductas con arreglo a fines buscaban preservar sus carreras militares y las posiciones de privilegio obtenidas tras el golpe, que estimaban amenazadas por la eventual recuperación del ejercicio del gobierno por los peronistas y por Perón. Esas motivaciones se combinaban, quizás en algunos de sus integrantes, con acciones guiadas por valores —los más declarados eran los democráticos—, pero esa conciencia discursiva se encontró en flagrante contradicción con las prácticas efectivas. Las elites castrenses iniciales se dividieron luego en minorías activas opuestas entre sí

por las aspiraciones a cargos e influencias sobre las decisiones estatales pero que, no obstante sus conflictos, coincidieron en mantener las intervenciones restrictivas sobre el desenvolvimiento del sistema político, arguyendo posiciones políticas de escasa consistencia argumentativa y disidencias sin verdaderos sustentos ideológicos. Más allá de las diferencias entre las tendencias militares, el sentido de la acción de las conducciones castrense no se vio mayormente modificado y el veto al peronismo se mantuvo, ampliándose por momentos a otros partidos y produciendo efectos de desorganización del conjunto del sistema de partidos.

Las relaciones de las cúspides militares con quienes ocupaban rangos subordinados resultan difíciles de analizar en tanto que, por la naturaleza de la organización castrense, los eventuales desacuerdos sólo tomaron estado público en limitadas ocasiones. En principio, los criterios facciosos para definir los ascensos de la oficialidad superior y las designaciones de los responsables de las jefaturas con capacidad estratégica de incidir en las relaciones de fuerza internas de cada una de las armas fueron procesos fácilmente observables, que, en los casos extremos, alcanzaron carácter violento. Hacia abajo, las lealtades, por convicción o conveniencia, a los mandos politizados manifestadas por la oficialidad de menor rango y menos influyente en las situaciones de crisis, debieron ser elementos decisivos a la hora de conseguir ascensos ayudados por vínculos particularistas. Así, en el plano interno, las instituciones militares argentinas revelaron el permanente deterioro de las regulaciones que en condiciones normales rigen el desenvolvimiento de las FFAA. de las sociedades occidentales modernas. Como sostuvo Max Weber: "el ejército moderno de masas es un ejército burocrático, y el oficial es una categoría especial de funcionario, en contraste con el noble, el *condottieri*, el cabecilla o los héroes homéricos. La fuerza efectiva del ejército descansa en la disciplina" (Weber, 1999: 1060). Sin duda, la dinámica facciosa afectó negativamente al profesionalismo militar y a las motivaciones personales de quienes habían escogido la carrera castrense como vocación, atraídos por sus objetivos generales o declarados. Si bien el desorden avanzó de modo permanente en las estructuras militares formales, el mismo alcanzó puntos extremos en los años de enfrentamientos muy intensos en los que las remociones alteraron todos los niveles de la jerarquía castrense. Potash, estudiando las conmociones de los años 1962-1963, constató que "no fueron sólo los generales quienes sufrieron los efectos de las luchas de facciones. Muchos coroneles, teniente coroneles y grados inferiores vieron sus carreras terminadas de modo prematuro. Pero por el mismo motivo otros oficiales, aquellos que terminaron en el bando ganador, se beneficiaron con las refriegas en términos de destinos y promociones favorables, y lo que es tal

vez más importante, por las oportunidades de usar sus posiciones militares para tratar de conformar el curso de la política nacional” (Potash, 1994: 25).

Los argumentos de los caudillos castrenses de comienzos del subperíodo analizado giraron en torno al tema de la defensa de la democracia, que estimaban vulnerada por el *totalitarismo y la demagogia peronista*, perspectiva que les ganó apoyos en una parte importante de la sociedad. Entre 1958 y 1962, los adversarios designados por las elites militares se ampliaron, y al antiperonismo se sumó el anticomunismo, en sintonía con las “amenazas” aparecidas en el continente con la revolución cubana. Los discursos y las prácticas represivas definieron al *comunismo internacional* como una entidad imprecisa y contradictoria, que incluía desde figuras y sectores del proscrito peronismo hasta a integrantes del gobierno radical presidido por Arturo Frondizi, sin dejar fuera a una parte de las elites intelectuales independientes y antiperonistas, al movimiento universitario, a partidos u órganos culturales de izquierda, y a empresarios a los que se acusaba de tener vinculaciones con la Unión Soviética.

Entre 1962 y 1966, las luchas por el control de los cargos de cumbre de cada una de las tres armas profundizaron la politización y aumentaron los criterios discrecionales para definir las promociones, razón por la cual, al igual de lo que sucede en cualquier otra organización burocrática, los discursos ideológicos debieron ser simples barnices de ocasión para acompañar acciones encaminadas a la búsqueda de logros individuales, lo cual hizo más confusas las ideas aducidas como justificaciones de los conflictos. En los planteos iniciales del golpe de 1966, el vacío ideológico fue notorio y en la combinación de orientaciones se presentaron, por una parte, temas afines al nacionalismo de derecha, y, por otra, se encaró la modernización económica mediante inversiones extranjeras y la desnacionalización de empresas de propiedad local. Como para demostrar que la alta oficialidad de las FFAA. carecía de convicciones coherentes, el golpe de palacio que depuso a Onganía designó en la presidencia al general Levingston quien impulsó políticas económicas nacionalistas y denunció a los monopolios extranjeros, nombrando en la dirección de la economía a Aldo Ferrer, ubicado dentro del reformismo de izquierda. Durante la fase siguiente, encabezada por Lanusse, la política tuvo prioridad y se pregonó *el fin de las fronteras ideológicas*, mientras que el desorden avanzaba en las filas de la oficialidad politizada, que hasta tuvo sus facciones de izquierda, al mismo tiempo que aumentaban los sectores castrenses que alertaban contra la *amenaza comunista*, encarnada, según decían, en los movimientos provinciales de protesta y en los grupos guerrilleros desarrollados a partir de 1969. En términos generales, ante la

convulsionada escena política conformada bajo el régimen autoritario que llegaba a su fin parecieron desvanecerse todas las pretensiones discursivas medianamente unificadas de los jefes militares y, con múltiples manifestaciones de la situación de desintegración de su estructura burocrática, el subperíodo 1955-1973 se cerró con la provisoria reconciliación de las FFAA. con el pluralismo democrático.

De la resumida exposición de las justificaciones de las corrientes en pugna en el ámbito militar y de las orientaciones de algunos de sus gobiernos del subperíodo que nos ocupa, surge la falta de consistencia argumental de los actores castrenses cuyos discursos erráticos tendieron a enfatizar los más disímiles temas, y si el *leitmotiv* de la lucha contra el comunismo fue relativamente estable, en tanto ese enemigo era más fantaseado que real, sirvió para perseguir a los más variados opositores, incluyendo a los dirigentes sindicales peronistas, en su amplia mayoría anticomunistas declarados.

Desde una perspectiva sociológica cabe sostener que los aparatos militares, fragmentados por la intensa politización de sus cuadros superiores cuya consecuencia directa era la desintegración del tejido de vínculos institucionales castrenses, carecían de las condiciones estructurales para poseer la ideología sólida y consecuente que no pocos análisis le han atribuido. En esa situación, las justificaciones de los jefes que rotaron en el encabezamiento de las elites militares yuxtapusieron inorgánicamente temas sin lograr configurar visiones coherentes sobre la sociedad o el mundo. Motivados por el interés en preservar o en maximizar los beneficios materiales y simbólicos derivados de la permanencia en el escalafón burocrático o, en el caso de los oficiales retirados, en retener los reconocimientos honoríficos y las canchías provenientes de participaciones, pasadas o presentes, en los círculos de poder castrense, los discursos militares carecieron de mayor unidad. Sin una ideología política, en la que se fijan metas y definiciones de la realidad relativamente claras, a los caudillos castrenses les resultaba fácil impulsar orientaciones contradictorias adoptadas a partir de cálculos coyunturales y pragmáticos. La única línea constante de su acción fue el veto electoral al peronismo y su supresión en 1973 reveló que el antiperonismo castrense era una estrategia de las elites militares que buscaban defender sus carreras ante un eventual retorno al gobierno de la fuerza política que habían sacado del poder primero y prohibido luego. En 1973 finalizó para los altos jefes militares el riesgo de aceptar al peronismo, pero la incapacidad que reveló dicho movimiento político para gobernar y los reclamos golpistas de los principales actores socioeconómicos le devolvieron a las desintegradas FFAA. la posibilidad de recuperar un rol político central, esta vez lo hicieron con la

propuesta de modificar profundamente las condiciones de funcionamiento del conjunto de la sociedad, la economía y el sistema político nacional.

La politización castrense y los grandes intereses empresarios, 1955-1973

Las ideas sobre la defensa del orden social, la preservación de las tradiciones y, especialmente, el ser custodio de la integridad del Estado-nación eran, por cierto, un componente de lo que se puede denominar la mentalidad castrense que creaba coincidencias básicas entre todos los miembros de las FF. AA., pero no era un programa de acción política ni, menos aún, un proyecto que inhibía la adopción de medios opuestos para asegurar dichas metas. Esa mentalidad, pudo, en otras épocas, crear afinidades entre los mandos castrenses y los sectores más adinerados de la sociedad, pero desde mediados de los años cuarenta del siglo XX los militares y quienes disponían de mayor poder económico revelaron tener prioridades distintas y esa diferencia se manifestó, sobre todo, durante la década de gobierno peronista.

En el trienio anterior al golpe de 1955, la combinación del cercenamiento de las libertades públicas y los límites impuestos a la agremiación patronal, con los cambios de las políticas económicas iniciados en 1951 y 1952, tendieron a apaciguar las relaciones entre el gran empresariado y el régimen peronista. El temor, el consenso y el cálculo, debieron aportar sus partes en las motivaciones de los integrantes de los principales sectores propietarios para encontrar una convivencia con un gobierno que nunca había dejado, en palabras y en acciones, de tener como meta la conciliación de intereses sociales o la "comunidad organizada". La institucionalización de las resoluciones de los conflictos sociales y la creación de corporaciones empresarias para que negociasen con las de los asalariados, el empleo de criterios de planificación en el plano social y económico,³ y las orientaciones de los organismos oficiales de crédito fijadas con el acuerdo de los representantes de la industria y del agro fueron iniciativas permanentes de las autoridades gubernamentales. Sobre los cambios de política del gobierno de Perón respecto a los grandes propietarios rurales durante sus últimos años, señala Noemí Girbal-Blacha: "El IAPI cambia diametralmente su función y —a través de un progresivo y sostenido endeudamiento— pasa a subsidiar al agro" (Girbal-Blacha, 2003:61). Las buenas relaciones del peronismo con los grandes intereses económicos se evidenciaron en el hecho de que desde 1952-1953, en la oficialista Confederación General Económica participaban

³ Sobre las estructuras de planificación estatal del gobierno peronista, ver Berrotarán (2003).

la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dos de las entidades más beligerantes contra el incipiente peronismo de 1945, y también revistaban en la entidad creada desde el gobierno las cámaras de la disuelta Unión Industrial Argentina (Sidicaro, 2002: 88-93). Así, el grueso de las representaciones corporativas patronales daba su apoyo público a Perón en la época de su caída. No es menos significativo recordar que el diario *La Nación* se había inclinado a favor de las autoridades nacionales a partir de 1951-52, sumando sus editoriales, por convicción o interés, a la monocorde prensa de la época (Sidicaro, 1993: 219-239). Aun cuando el antiperonismo individual de muchos empresarios o de demás asimilados de última hora por temor no se expresara públicamente, cabe suponer que podía estimular en la sociabilidad privada o familiar la realización del movimiento castrense de 1955, no obstante, ese tipo de acción no debió ser muy eficaz pues la gran mayoría de la oficialidad se mostró fiel al gobierno en la coyuntura de su caída.

Si el deseo de una especie de *pax romana* peronista no se convirtió en ningún momento en una realidad estable a pesar de tener tantos apoyos, esto fue, probablemente, por las profundas huellas dejadas por las rupturas de los comienzos del peronismo en los imaginarios sociales respectivos, reactivadas en los momentos de crispación política con el uso del particular lenguaje bélico de Perón y de los altos dirigentes de su gobierno, en especial en sus frecuentes rituales de celebración de efemérides y en las circunstancias en que estimaban en riesgo la continuidad de su poder estatal. La articulación compleja entre, por un lado, la tendencia a la institucionalización creciente del orden político y administrativo y, por otro, el empleo de movilizaciones plebiscitarias en torno a un jefe carismático que agitaba a sus seguidores con temas susceptibles de mantener la emotividad fundacional, se hallaron, sin duda, en la constitución de una escena pública que, por momentos, parecía anunciar una guerra civil. Esto ocurría, sin embargo, mientras los jefes peronistas pasaban, en conceptos weberianos, de las acciones propias de la ética de la convicción a las correspondientes a la ética de la responsabilidad, transición en que la satisfacción de sus intereses simbólicos se acompañaba con la seguridad material que les daba su carácter de profesionales de la política y el prolongado disfrute de los cargos de la función pública.

El gran empresariado no fue un actor colectivo con participación pública en el golpe de estado, si bien el cambio fue recibido con satisfacción por sus entidades corporativas que se esmeraron en explicar que su apoyo a Perón había sido el resultado de la coerción gubernamental. Durante todo el subperíodo 1955-1973 creció la influencia política tanto de las corporacio-

nes empresarias como de las sindicales como efecto, fundamentalmente, de las restricciones impuestas por las elites militares al normal funcionamiento de las regulaciones democráticas del sistema político. En sus convenciones y declaraciones públicas, las organizaciones patronales ligaron con frecuencia los problemas políticos con los sociales y económicos proponiéndole a los militares una serie de asociaciones entre la *cuestión peronista* y la *cuestión social*, que impulsaron la necesidad de limitar las libertades sindicales. En condiciones relativamente normales, los distintos sectores empresarios no tenían más que las declaraciones corporativas y los estudios realizados por algunos de sus economistas para influir sobre las ideas de los jefes castrenses. En las condiciones de crisis institucional, las acciones empresarias ampliaban sus expectativas al integrarse a coaliciones golpistas, una más restringida en 1962, y otra más importante en 1966, cuando se formó un bloque patronal que ganó inicialmente gran influencia sobre las tomas de decisiones, para perderla luego al declinar las coincidencias en su seno frente a las políticas gubernamentales.

El gran punto de convergencia entre las elites castrenses del subperíodo analizado y los grandes sectores empresarios y sus organizaciones corporativas residió en el común interés por evitar que los peronistas alcanzaran el control del gobierno nacional. Para las distintas categorías sociales que componían el fragmentado y contradictorio mundo empresarial, la amenaza peronista era identificada con la acción reivindicativa de los sindicatos y con lo que genéricamente denominaban *el populismo y la demagogia*, términos que remitían, básicamente, al rechazo a las iniciativas favorables a los asalariados y a los sectores populares en general. Ese acuerdo global sobre la *cuestión peronista* y, por consiguiente, la necesidad de limitar el funcionamiento de las regulaciones democráticas del sistema político, estaba lejos, sin embargo, de dar lugar a un proyecto capaz de proveer un marco de referencia ideológico que hiciese de las FF.AA. lo que en algunos análisis se llamaba un "instrumento" del "capital".

La manera equivocada de dar carácter estructural a una convergencia cuyos fines eran mucho más puntuales, se fundaba en dos supuestos carentes de base empírica: 1) que las FF.AA. eran un actor homogéneo; y 2) que el "capital" correspondía a una clase dominante unificada y, por lo tanto, que sus intereses comunes podían ser representados por los militares. El primer supuesto ignoraba, u obturaba, la percepción de los diversos observables empíricos que revelaban la situación de desintegración de las FF.AA. y su estado de anomia institucional, es decir, sus mínimas reglas para regir las conductas de sus jefes cuya politización conducía a la creciente desorganización castrense. El segundo supuesto omitía la consideración de todas las

dimensiones empíricas que mostraban que el “capital” no constituía un actor unificado y que se hallaba dividido, como en cualquier sociedad de tipo capitalista, en fracciones o categorías sociales con conflictos de intereses, y que en el caso argentino existía una particularidad no tan corriente en ese tipo de sociedades: ninguna de esas fracciones del capital disponía del poder necesario para establecer una hegemonía sobre las demás, imponiendo su dirección económica, política e intelectual de largo plazo, mediante la subordinación de las fracciones secundarias o la supresión de los intereses opuestos a su proyecto. Si se considera la efectiva situación de las FF.AA. y de los principales actores socioeconómicos se pueden explicar las causas de la imposibilidad argentina de consolidación de regímenes dictatoriales prolongados como el de Franco en España desde 1939, el de Brasil desde 1964 o el de Chile desde 1973, casos en los que se combinaron, tanto desde la parte castrense como desde la del poder económico, elementos mucho más homogéneos que los vernáculos.

La divergencia entre los intereses de los jefes castrenses y los del “capital” quedó manifestada en el hecho de que en 1973 las FF.AA. aceptaron que el peronismo accediese al manejo de los poderes de gobierno, cuando, desde todo punto de vista, los peronistas de comienzos de los años setenta se mostraban mucho más predispuesto que los de circunstancias anteriores a lesionar los intereses de los grandes actores económicos nacionales y extranjeros. Al respecto, entre otros aspectos empíricos, cabe mencionar: 1) el acuerdo de los peronistas con una fracción menor de los industriales representada por la CGE, entidad abiertamente hostil a los intereses económicos predominantes en el subperíodo; 2) el peso, superior al de épocas anteriores, de los sindicatos en las estructuras internas del peronismo, con sus reivindicaciones “populistas” de mejoras salariales y de ampliación de conquistas sociales; 3) la difusión y la agitación de ideas de tipo anticapitalista llevadas adelante por los sectores más radicalizados del peronismo, una verdadera novedad en su historia.

Del análisis del subperíodo 1955-1973 surge que la confluencia entre las elites militares y las cumbres del poder económico, cuando se formaron coaliciones golpistas que pedían la interrupción de la continuidad institucional, no se expresó luego en gobiernos de *facto* que actuaran como simples encargados de realizar los proyectos de sus asociados civiles. En esas circunstancias se pudo observar que los actores socioeconómicos predominantes podían conjugar más fácilmente sus preocupaciones políticas inmediatas que sus intereses económicos y que, en consecuencia, eran incapaces de convertirse en los soportes sociales de un proyecto gubernamental que fuese más allá de restringir la acción sindical y las demandas de los asalariados.

Tan pronto como se discutía sobre programas económicos o se decidían políticas en la materia, aparecían las fisuras y algunos de los componentes empresarios de la coalición golpista tomaban distancia de los gobiernos militares. Señalemos que la dialéctica agónica de los conflictos entre los principales actores socioeconómicos no podría interpretarse mediante la metáfora deportiva, bastante difundida pero sin fundamentos, que atribuyó la situación de ausencia de “ganadores” a un “empate hegemónico”, dado que el período no se caracterizó por el *exceso* de capacidades hegemónicas sino por el *defecto* o *ausencia* de las mismas. Igualmente inconsistente nos parece el argumento que opta por ignorar las divisiones de los grandes sectores propietarios y los considera como una supuesta clase dominante, con intereses diversificados y polivalentes, que se beneficiaba, no a pesar, sino en virtud de su heterogeneidad, y que maximizaba sus ganancias estimulando la inestabilidad institucional, razón por la cual alentaba los golpes militares. De aceptarse esa conjetura, en el período habría existido un actor militar que se desgastaba en los gobiernos de *facto* para servir a la supuesta clase dominante, para volver cíclicamente al poder y fracasar, pero que cumplía con la labor de satisfacer al “capital”. En este caso, la idea metafórica remitiría a la hidra de siete cabezas del lago de Lerna, las que renacían a medida que se las cortaban, y permanecía siempre igual a sí misma. El enriquecimiento y la ampliación de los patrimonios de los disímiles grandes actores socioeconómicos del subperíodo, podía, es cierto, dar lugar a diseñar, mirando la desigual distribución de las ganancias, la creencia que existía una unidad *virtual* o, si se prefiere emplear la noción de Pierre Bourdieu, una *clase sobre el papel* (Bourdieu: 2000: 101-129). Sin embargo, ese tipo de ideas, estilo las dos centenas de familias que dominan un país, pertenece a la creencia vulgar que afirma que los *ricos* son un grupo social unificado o que el agregado estadístico del uno por ciento superior de los perceptores de ingresos forman una clase social.

En lugar de plantear que las elites militares y sus jefes operaban como representantes de los grandes sectores propietarios, entendemos que del análisis del subperíodo surge que los fracasos de los gobiernos castrenses se explican, en parte, por la imposibilidad de establecer esos vínculos de un modo orgánico. Si bien las condiciones de anomia institucional debieron favorecer los negocios personales de altos jefes militares, cuya libertad de acción se ampliaba con el debilitamiento de la integración del orden castrense, sus iniciativas fueron, en sentido estricto, homólogas a las de los comisionistas individuales de empresas o de grupos económicos, pero dado el carácter limitado de los intereses con los que se relacionaban, sus intermediaciones no pueden confundirse con las relaciones de representación de

intereses de sectores sociales. Por otra parte, objetivamente, el deterioro del carácter racional y previsible de la acción estatal provocado con la inestabilidad institucional impuesta por las elites militares favoreció lo que Max Weber definía como el *capitalismo aventurero*, cuyos empresarios se enriquecen con las prebendas, concesiones y contratos públicos, ganancias sin mayores riesgos, prácticas que poco tienen en común con la formación de las clases sociales del capitalismo moderno (Weber, 1999:1062). Además, en tanto que los gobiernos castrenses se encargaban de reprimir y contener las demandas de los sectores asalariados y, particularmente, de los obreros industriales, se generaban condiciones que hacían innecesarias la organización política y las tareas ideológicas que son características de las clases propietarias modernas cuando deben defender por sí mismas sus intereses.

Los efectos de la politización militar sobre los partidos políticos, 1955-1973

Como sostiene Jon Elster, “las instituciones impiden que la sociedad se desmorone siempre que haya algo que impida que se desmoronen las instituciones” (Elster, 1990: 146). En sus justificaciones, los jefes de la elite castrense presentaban a las FFAA. como custodias de las instituciones nacionales al mismo tiempo que desmoronaban la propias al politizarlas. Como en *un efecto dominó*, la acción castrense de preservación de los intereses de sus elites necesitó suprimir o coartar el libre desenvolvimiento de los partidos políticos y los condujo a su desorganización; empleó criterios particularistas en la selección y “depuración” de las burocracias públicas y agudizó su ineficiencia; reprimió la modernización cultural y deterioró la educación pública; y favoreció, tal como lo señalamos, el desarrollo del capitalismo aventurero.

En tanto que el sentido de las acciones de politización de las elites militares apuntaba a evitar que el peronismo alcanzara las posiciones de control del gobierno nacional, la pregunta que cabe plantear es sobre los efectos producidos por las restricciones impuestas a dicha fuerza política. En primer lugar, y a diferencia de las meras narraciones de los hechos, corresponde destacar el significado conceptual de la proscripción de los dirigentes de una fuerza política con apoyos electorales suficientes como para aspirar con probabilidades de éxito a acceder al control de los aparatos gubernamentales. En situaciones normales, de acuerdo a la perspectiva teórica de Max Weber, se pueden diferenciar los partidos que “son esencialmente organizaciones patrocinadoras de cargos [...] cuyo objetivo consiste en llevar a sus jefes por medio de elecciones al lugar director, para que éstos distribu-

yan luego cargos estatales entre sus séquitos”, de aquellos que “son principalmente partidos de ideología que se proponen, por consiguiente, la implantación de ideales de contenido político”, si bien, “por lo regular suelen ser ambas cosas a la vez” (Weber, 1999: 1078-1079). Desde esta óptica conceptual, la caracterización de los efectos del conflicto entre las elites militares y los peronistas abre un tema interesante del que nos limitaremos a abordar los aspectos más generales.

El peronismo reveló, en la coyuntura de septiembre de 1955, ser una fuerza política en crisis y con una conducción desprovista de respuestas para afrontar un desafío que era ampliamente previsible. En un contexto caracterizado por las buenas relaciones con los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, cuando todo hacía prever una prolongada continuidad de Perón en el gobierno, el conflicto con la Iglesia Católica escapó del control del partido oficialista y del aparato estatal. Ese conflicto revitalizó a los partidos de oposición, debilitó el consenso en el seno de la dirigencia peronista, hirió la sensibilidad de amplios sectores de la población en general, y de los católicos en particular, y fue una significativa fuente de malestar en los miembros de las FFAA. Son muchos los datos que evidencian la falta de conducción política ante la sublevación de septiembre, cuando el gobierno decidió no movilizar a la gran mayoría de militares que permaneció leal a sus ordenes y no reprimir a las pocas unidades amotinadas. Perón dejó el poder, en tanto que su vicepresidente, el almirante Tesaire, mostró un desentendimiento total con el régimen derrocado y sumó su opinión a la de sus críticos. Los dirigentes del partido peronista no convocaron a sus multitudinarias bases y los altos jefes de la CGT aceptaron con satisfacción el llamado a la concordia del general Lonardi y de su ministro de Trabajo, un asesor letrado de la Unión Obrera Metalúrgica. Carentes de dirección orgánica, los intentos de protesta popular fueron débiles y rápidamente reprimidos. En tanto la crisis de la dirigencia peronista se revelaba tan profunda, no resulta sorprendente que el gobierno de Lonardi no lo prohibiera como partido, no interviniera los sindicatos ni le quitara a la CGT el control del diario *La Prensa*, verdadera pieza emblemática en la época.

La etapa comenzada con el golpe de palacio que destituyó a Lonardi tuvo por consecuencia producir un escenario que dio origen a un nuevo peronismo que, paradójicamente, se revitalizó ideológicamente con la proscripción. Cuando fue notorio que sufrirían una marginación prolongada de las arenas electorales, quedándoles bloqueados el acceso a los puestos de gobierno a sus jefes y que, por lo tanto, éstos no podrían repartir cargos entre sus séquitos, a los dirigentes peronistas le quedaron pocas alternativas. Suprimidas las expectativas propias de los partidos patrocinadores de cargos

públicos, la mayoría de dichos dirigentes que había participado de la desalojada gestión gubernamental abandonó la actividad política, pero otra parte se volcó a una reconstrucción de la identidad y de la historia partidaria. Así, a partir de juntar referencias a hechos que efectivamente habían ocurrido en el decenio de Perón, con otros un tanto fantaseados pero verosímiles y, a su vez, suprimiendo las menciones discordantes con la imagen general que debía servir para la nueva fase, y sin que existiese una orquestación de todos aquellos que participaban de esa de construcción de una memoria colectiva, el peronismo se dotó de una identidad que contribuyó a su perduración en los sectores sociales que lo reconocían como tradición política propia. Como sucede con cualquier ideología política, la realidad y la fantasía se plasmaron en un gran relato, más o menos epopéyico, que dio respuesta a la pregunta *¿quiénes somos?* En un sentido general, mediante esa operación discursiva se tendió a elaborar la imagen de un peronismo coherentemente obrero, popular y nacionalista, que obturaba las menciones de los moderados funcionarios de su gobierno que habían congelado salarios y establecido las prohibiciones de huelgas; un relato que hacía del golpe de 1955 el fruto de la *conspiración oligárquica* y suprimía las notables mejoras de las relaciones con la Sociedad Rural Argentina y daba por inexistentes las aperturas al capital extranjero desde comienzos del decenio de 1950. Con conceptos de Max Weber: el peronismo que estaba impedido de operar electoralmente como partido patrocinador de cargos se transformó en una confederación de grupos dedicados a la agitación política e ideológica. Sin posibilidad de manejar resortes estatales, los peronistas perdieron su anterior moderación y mutaron en una fuerza política que, empleando un concepto propuesto por Georges Lavau en sus investigaciones sobre el partido comunista francés, asumió la función *tribunitienne* o de dar tribuna a los que no tienen voz (Lavau, 1981): así Perón y los dirigentes de su movimiento pasaron de los vínculos burocráticos con los sectores populares, propios del decenio en que administraron bienes públicos en nombre del Estado que organizaba la sociedad, a una relación que atizaba conflictos sociales y estimulaba las resistencias de todo tipo. Todas estas acciones poseían aún más eficacia en virtud del hecho de que los grupos en que se hallaba dividido el peronismo competían entre sí para aumentar sus adeptos y eso los estimulaba a desenvolver más emprendimientos proselitistas. Así, como efecto no buscado de la acción, las iniciativas de las elites militares contribuyeron a la recreación de un peronismo que dejó de lado las políticas de conciliación e integración social que proponía cuando fue desalojado del gobierno. Por cierto, en cuanto a los intereses de las elites castrenses, ese cambio los favorecía en tanto que los peronistas aparecían como más amenazadores y se

incrementaba frente a ellos el temor de una parte de la sociedad ante su retorno al gobierno.

Desde la misma matriz conceptual de comprensión de las acciones partidarias se pueden explicar los efectos que provocó el cierre del sistema político sobre la Unión Cívica Radical. Restringida la participación electoral de los peronistas se abrieron las posibilidades de los jefes radicales de alcanzar los altos puestos de los gobiernos nacionales y provinciales y satisfacer las aspiraciones de cargos de sus respectivos séquitos. Si en la UCR, la combinación entre el carácter de partido patrocinador de cargos y el de defensor de ideales políticos se había inclinado hacia el segundo aspecto en los diez años en los que se halló en el llano en la oposición a Perón, después de 1955 esta relación se invirtió. El interés por alcanzar el gobierno, dada la restricción electoral del peronismo, fue un factor que jugó decisivamente en la división de los radicales cuyos jefes y séquitos formaron dos partidos, con plataformas programáticas idénticas pero diferenciados coyunturalmente en las posiciones adoptadas frente a los peronistas y a las elites castrenses.⁴ De ese modo, el partido que unificado hubiese concitado una cantidad de sufragios suficientes como para disputar la mayoría a los seguidores de Perón, se quebró en dos fuerzas más débiles cuyos gobiernos fueron sucesivamente destituidos por las FFAA. Así, con la división de la UCR, las elites militares se encontraron con el hecho de que la fracción frondicista conquistó en 1958 el gobierno aliándose con los peronistas, en tanto el radicalismo del Pueblo, que mantuvo la adhesión al antiperonismo, tuvo una limitada presencia en la arena electoral, la cual, sin embargo, le permitió alcanzar la presidencia en 1963 mediante elecciones de escasa legitimidad.

En una situación de enfrentamiento con todos los partidos políticos, las elites militares planearon una alianza corporativa con los empresarios y con los sindicatos para instaurar la dictadura de 1966, declarando la decisión de modificar radicalmente la economía, la sociedad y la política. El acuerdo corporativo demostró muy rápido carecer de las condiciones necesarias para dotar de legitimidad a una política dictatorial que no podía satisfacer las demandas conflictivas de sus integrantes. Durante algo más de seis años los altos jefes de las FFAA. desgastaron su poder enfrentándose con los más disímiles sectores sociales, mientras que su objetivo de mantener clausurados los mecanismos electorales de la democracia provocó que la política pasase a expresarse por medios violentos y que en el conjunto de la estructura social se manifestase un clima de efervescencia política antes desconocido. Si hasta 1966 los miembros de las elites castrenses habían conseguido

⁴ Sobre los debates y las divisiones de la Unión Cívica Radical, ver Spinelli (2004: 3001-304).

dotar a sus iniciativas políticas de un carácter no tan estrechamente ligado a sus intereses personales de progresar en el escalafón, y que excluían a los peronistas en nombre de la democracia, consiguiendo aliados para ese fin, con la dictadura de Onganía quedó en evidencia que a los militares los movían motivaciones individuales, fuesen las ambiciones de algún *condottieri* o las pequeñas camarillas, y que incluso estaban dispuestos a profundizar la desintegración de las instituciones castrense para preservar sus propias posiciones.

La experiencia de los años 1966-1973 le permitió a la clase política alcanzar una unidad en sus reclamos de retorno a los mecanismos democráticos de un nivel no registrado en otras épocas, y a los dirigentes peronistas ser aceptados por los demás partidos como miembros plenos de dicha clase. El antagonismo entre civiles y militares nunca se había planteado de un modo tan neto en los anteriores regímenes castrenses y las salidas limitadas habían sido más fáciles de imponer. Sin duda, el carácter casi totalmente libre de las elecciones de 1973 no puede explicarse únicamente por los reclamos civiles. Al respecto debe destacarse que este retorno a la democracia se produjo cuando se completaba la carrera de los últimos uniformados que podían ser perjudicados por la vuelta al control del Estado de los peronistas. Sobre la salida militar presidida por Lanusse sosteníamos en un artículo reciente “que si se piensa que durante casi dos décadas el interés por preservar la continuidad burocrática de sus carreras había sido un factor central en el proceso de politización castrense, en especial en los casos de los militares con más antigüedad amenazados por el eventual retorno de los peronistas al manejo gubernamental, no puede sino subrayarse el hecho de que fuese Lanusse, uno de los más jóvenes oficiales reincorporados al Ejército en 1955, que, una vez alcanzadas las cimas de los respectivos escalafones por quienes se hallaban en su misma condición de riesgo, estimara posible devolver el gobierno al peronismo” (Sidicaro, 2004:86).

El cierre: 1973-1976

Tal como señala Robert Potash, siguiendo los usos en materia de designaciones de Comandante en jefe del ejército, al nombrar el presidente Cámpora, en mayo de 1973, a un militar de menor antigüedad en la jerarquía castrense, fueron dados de baja nueve generales de división: en ese grupo se encontraban personas que habían compartido un pasado común con Lanusse –fuese a principios de la década de 1950 en el conato de golpe contra el presidente Perón o en los primeros años de la de 1960 en la facción Azul–, y también fueron pasados a retiro cinco generales de brigada que habían

trabajado estrechamente con él. El otro aspecto relevante producido por el cambio de gobierno, según Potash, consistió en el hecho de que el arma de caballería perdió el predominio que tenía desde 1963 en los máximos cargos de comando del ejército. El mencionado autor destaca, además, que con los relevos llegó a los puestos más altos una generación más joven de oficiales (Potash, 1994: 441). Ese aspecto descriptivo del cambio generacional según el relato de Potash, en los términos de nuestro análisis, significó la instalación en las cumbres castrenses de promociones de altos oficiales cuya socialización institucional había sido hecha en las condiciones de descomposición de los marcos de regulación de la vida militar.

Desde inicios de la etapa 1973-1976 fue fácil percibir que los peronistas no conseguían ponerse de acuerdo sobre como gobernar los aparatos estatales en crisis recibidos de la dictadura militar. Los años de proscripciones, como se observó anteriormente, habían favorecido la ideologización del peronismo cuyas tendencias aparecían como poco o nada conciliables en términos doctrinarios, dando lugar a que esas diferencias se potenciaron cuando llegó el momento de repartir cargos públicos. Las proscripciones impuestas por las FFAA. no habían generado las condiciones necesarias para un proceso ordenado de rutinización del carisma y, al fallecer Perón, las disputas sucesorias quedaron abiertas con inédita violencia. En ese panorama, las distintas facciones militares se mostraron divididas en cuanto a las opciones tácticas a adoptar; además, el prolongado entrenamiento que les había dado la politización y la anomia reinante en las instituciones castrenses debió llevar a sus jefes a vislumbrar la instalación de un nuevo régimen dictatorial para acceder a las ventajas materiales que proporcionaría su manejo. Si bien en los tres años de este subperíodo no faltaron los altos oficiales que buscaron aliarse con sectores del gobierno, la orientación dominante fue la de avanzar en la progresiva autogestión de las respectivas fuerzas para el manejo propio de los ascensos y la designación de sus Comandantes en jefe.

La existencia de organizaciones guerrilleras, que en ningún momento parecieron tener capacidad bélica como para convertirse en alternativas de poder, fue uno de los pretextos utilizados para la renovación de la politización militar, ahora asociada con la defensa frente a la supuesta "amenaza comunista", que los jefes castrenses estimaban insuficientemente controlada por las autoridades nacionales y provinciales. En la nueva fase de politización fueron públicos los apoyos de los jefes militares a las destituciones de mandatarios provinciales a los que se acusaba de ser complacientes con las acciones o la existencia de grupos armados de filiación peronista o de izquierda. Por otra parte, distintos análisis mostraron que los altos mandos de

las FFAA. no fueron ajenos a la creación de las entidades represivas paraestatales que comenzaron a desarrollarse durante el gobierno peronista y expandieron sus actividades bajo la dictadura procesista. De modos diferentes, la presencia castrense se mantuvo en el juego político durante el trienio de la inviable administración peronista en la que rotaron cinco presidentes y en la que la violencia política y la crisis económica alcanzaron niveles superiores a los anteriores, destinados, sin embargo, a ser superados por sus sucesores dictatoriales. La dictadura de 1976 se instaló con el apoyo de los principales actores socioeconómicos que se habían movilizado desde tiempo antes para pedir el derrocamiento de los mandatarios civiles, aduciendo, entre otras cuestiones, que *el populismo y la demagogia* gubernamental fomentaban movilizaciones y demandas sindicales que eran tanto o más peligrosas para el orden social que las acciones de inspiración marxista.

Las proclamas militares que justificaron la interrupción de la continuidad institucional en 1976 tomaron los argumentos de los grandes empresarios, que no eran en absoluto contradictorios con las ideas castrenses en materia de anticomunismo y de antipopulismo. No obstante, la coincidencia con respecto al comunismo se reveló mucho más formal que la relativa al *populismo*. Una muestra clara de la insustancialidad de las ideas anticomunistas de los militares argentinos la brindó la nueva dictadura que desde sus inicios expresó su decisión de profundizar las relaciones económicas con la Unión Soviética, quizás uno de los objetivos que más respetó, y esto fue así a tal grado que en 1979, en nombre de la independencia y de la soberanía nacional, se negó a participar del boicót comercial organizado por Estados Unidos contra la URSS como represalia por la invasión a Afganistán, lo que le permitió a la Argentina consolidarse como el gran abastecedor de cereales de la gran potencia comunista. Por otra parte, con la intención de conseguir sustentos sociales, en sus postrimerías, el gobierno dictatorial emprendió la guerra del Atlántico Sur, se enfrentó con la OTAN y solicitó el apoyo de los países del Este y de sus aliados.

En cambio, la destrucción de las condiciones sociales y políticas que generaban *el populismo y la demagogia*, entendidas en las mismas claves con las que pensaban las corporaciones empresarias y sus economistas, es decir, básicamente la desarticulación de las entidades sindicales y de las organizaciones de representación de las clases populares que bregaban por la ampliación de los derechos de los asalariados y de los sectores más pobres de la población, fue una meta que la dictadura mantuvo con mucha más coherencia. En el subperíodo 1973-1976, los jefes militares no tuvieron la anterior preocupación por la *cuestión peronista*, que ya había dejado de ser una amenaza para sus intereses y sus carreras en el escalafón castrense, y centraron

sus objetivos en preparar la solución de los problemas derivados de la importancia que habían ganado los sectores sociales de menores ingresos, y en especial los sindicatos, en la vida política nacional. El programa económico del ministro Martínez de Hoz apuntó, en 1976, por un lado, a desorganizar a las entidades políticas y gremiales que articulaban demandas de sectores populares y, por otro, a eliminar a las categorías empresarias que defendían las protecciones del mercado interno. El objetivo de la dictadura era suprimir a los actores que podían obstaculizar el éxito del proyecto de "revolución desde arriba" que el Proceso anunciaba como programa máximo, pero que en lo inmediato le aseguraba beneficios materiales a la alta oficialidad de las FFAA., que había pactado repartir de modo tripartito todas las responsabilidades de gobierno y las fuentes de ingresos legales e ilegales que surgían de su administración.

A los dos meses de instalada la nueva dictadura, el general Videla hizo su relato de lo ocurrido entre los inicios de la presidencia de Héctor Cámpora hasta el desenlace de marzo de 1976:

"Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar que en las primeras horas del día 25 de mayo de 1973, en oportunidad en que se izaba el pabellón nacional en una ceremonia desarrollada frente al edificio del Comando general del Ejército, cuando una turba de agitadores, con palabras y con gestos, pretendió interrumpir esa celebración. Baste recordar que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública, y se vieron impedidas de hacerlo por una turba que desordenadamente copó la calle [...] Baste recordar que días inmediatamente después las oficinas públicas eran tomadas por asalto por grupos armados que querían imponer su gente [...] A partir de mediados de 1974, y más precisamente a partir de la muerte del expresidente Perón, el proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 entró en un franco plano inclinado al deterioro. Deterioro que hizo crisis a fines de 1975. Esta crisis estaba caracterizada fundamentalmente por las siguientes circunstancias: una marcada atomización dentro del partido gobernante, circunstancia que restaba sustento político al propio gobierno. A falta de ese sustento político, el gobierno recurrió a las organizaciones sindicales, única estructura organizada, para cubrir el vacío dejado por el único partido que lo sostenía. Con eso se logró un clima de indisciplina social. Los dirigentes carecieron de representatividad en lo específico, y se generó una infiltración con tendencia izquierdizante desde las bases de las propias estructuras sindicales [...] y las Fuerzas Armadas, como institución, dieron una respuesta institucional a una crisis también institucional, asumiendo el poder el día 24 de marzo de 1976." (Discurso del general Videla difundido el 24 de mayo de 1976)

La interpretación de Videla participaba del comienzo de la larga saga de narraciones dedicadas a dar cuenta de modo superficial de los aspectos más visibles de los tres años de la experiencia de gobierno peronista. Videla nombraba las secuencias y relacionaba los elementos inmediatos que percibía desde su particular posición en el espacio social en el que él y los mandos militares veían y enunciaban el sentido de los sucesos. Desde la visión castrense, las exposiciones con pretensiones explicativas tenían necesariamente su *punto ciego*: no hacían referencia alguna a los dos decenios en los que las elites militares habían desorganizado el sistema de partidos políticos y debilitado las capacidades burocráticas, técnicas, políticas y económicas del Estado. Esos partidos y esas condiciones estatales fueron los actores y el marco institucional del inviable gobierno destituido. Los conflictos sociales y la crisis económica completaban el panorama que, según el presidente *de facto*, daban legitimidad al golpe de estado y al proyecto refundacional encarado por las FEAA.

Prácticamente, todas las acciones que llevaron adelante los militares a partir de 1976 mostraron los extremos alcanzados por la situación de anomia y de disolución institucional. Los altos jefes castrenses, que declararon querer realizar una transformación total de los modos de funcionamiento de la sociedad y del Estado, habían incorporado los *habitus* o sistemas de predisposiciones propios de quienes habían participado en las instituciones militares desintegradas. Los métodos terroristas empleados contra la sociedad en general e, incluso, para resolver disputas internas, deben considerarse como los observables empíricos de la culminación de los procesos de desintegración de las instituciones castrenses iniciados dos decenios antes. El primer acuerdo de los jefes de cada una de las tres armas fue proceder a la distribución por tercios de las estructuras estatales (gobiernos provinciales, municipales, empresas públicas, etc.) y, seguramente, debieron prometer a sus séquitos de oficiales, según las respectivas relaciones de fuerza imperantes dentro de cada arma, subdividir luego los espacios adjudicados con criterios patrimonialistas para favorecer a los responsables de los diferentes cuerpos castrenses dándoles el control de gestiones que proporcionaban beneficios materiales.⁵ Pero, en los hechos, ni ese orden pudieron respetar y los *condottiere* de las minorías activas de 1976 se revelaron más desintegradores de las instituciones militares y desorganizadores de la sociedad, del Estado y de la economía que cualquiera de las elites militares anteriores.

⁵ Sobre las divisiones por tercios y, más en general, sobre el funcionamiento del Proceso, ver, Quiroga (2004).

Bibliografía citada

- Berrotarán, Patricia, (2003), *Del plan a la planificación. El Estado durante la época peronista*, Buenos Aires, Imago mundi.
- Bourdieu, Pierre, (2000), *Poder, derecho y clases sociales*, Bilbao, Desclée de Brouwer.
- Durkheim, Émile y Paul Fauconnet (1903), "Sociologie et sciences sociales", en Durkheim, Émile, (1975), *Textes. I. Éléments d'une théorie sociale*, Paris, Minuit.
- Elster, Jon, (1990), *Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales*, Barcelona, Gedisa.
- Germani, Ana Alejandra (2004), *Gino Germani. Del antifascismo a la sociología*, Buenos Aires, Taurus.
- Germani, Gino, (1968), *Política y sociedad en una época de transición*, Buenos Aires, Paidós.
- Germani, Gino, (1972), *Politique, société et modernisation*, Belgique, Duculot.
- Girbal-Blacha, Noemí, (2003), *Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista (1946-1955). Una interpretación histórica de sus decisiones político-económicas*, Universidad Nacional de Quilmes. Editorial, Bernal.
- Lavau, Georges, (1981), *A quoi sert le parti communiste français*, Paris, Fayard.
- Potash, Robert, (1994), *El Ejército y la política en la Argentina 1962-1973. De la caída de Frondizi a la restauración peronista. Primera parte*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Quiroga, Hugo, (2004), *El tiempo del "Proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares*, Rosario, Homo Sapiens,
- Rouquié, Alain, (1982), *Poder militar y sociedad política en la Argentina, II 1943-1973*, Buenos Aires, Emece.
- Sidicaro, Ricardo, (1993), *La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909-1989*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Sidicaro, Ricardo, (2002), *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/ 1989-99*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Sidicaro, Ricardo, (2004), "Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el 'proceso' en perspectiva comparada", en Pucciarelli, Alfredo (coord.) *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 53-96.
- Spinelli, María Estela, (2004), *Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la "revolución libertadora"*, Buenos Aires, Biblos.
- Weber, Max, (1999), *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. México, FCE.